

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 27º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-28758-2018
CARATULADO : SOCIEDAD CAMO ODONTOLOGÍA
SPA/SEREMI SALUD METROPOLITANA

Santiago, diecisiete de Agosto de dos mil veinte

VISTOS:

Comparece doña Constanza Gabriela Jorquera Chacón, abogada, en representación de sociedad CAMO ODONTOLOGÍA SPA, RUT N° 76.640.627-0, del giro de su denominación, , ambos domiciliados para estos efectos en Antonio Bellet 77, oficina 101, comuna de Providencia, interponiendo reclamo judicial conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Código Sanitario en contra de la sentencia dictada en la Resolución Exenta N° 5508 de 9 de agosto de 2018, que rectificó las Resolución Exenta N° 008985 de 6 de febrero de 2018, ambas dictadas por la SECRETARÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SALUD, representada legalmente por doña Rosa Oyarce Suazo, cuya profesión u oficio ignora en el Sumario Sanitario Expediente N° 4300/2017 de la Oficina de Profesiones Médicas, notificada a su parte con fecha 7 de septiembre de 2018, por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en cuya virtud se impone una multa a su representada ascendente a 20 Unidades Tributarias Mensuales, solicitando acogerla a tramitación y, en definitiva, dejar sin efecto la sanción aplicada, o en subsidio amonestar, sin aplicar multa, o, en último caso, rebajar la multa, de acuerdo a los argumentos de hecho y de derecho, con expresa condenación en costas.

Funda su demanda en que el 3 de octubre de 2018, funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Salud se constituyeron en las salas de procedimiento dental de su representada, cuyo nombre de fantasía es “Óptima Dental”, ubicadas en Victoria 442, comuna de San Bernardo, estableciendo en el Acta de Inspección, que consta a fojas 1 y 2 del expediente N° 4300-2017 del sub departamento de profesiones médicas de la SEREMI, correspondiente a esa causa, de fecha 30 de octubre de 2017, previa fiscalización por funcionarios inspectores las siguientes infracciones:

- 1.- Sala de esterilización no cuenta con flujo unidireccional para realizar dicho proceso.
- 2.- Se realizó modificación de planta física del 2º piso, sin informar a la SEREMI, se trasladó área de esterilización a sala de lockers del personal y kitchen se traslada a sala de esterilización.

Refiere que con fecha 7 de noviembre de 2017 su parte hizo los descargos correspondientes, adjuntando las pruebas pertinentes.



Foja: 1

Agrega que sin perjuicio de lo declarado por su parte y las pruebas aportadas, con fecha 6 de febrero de 2018, mediante Resolución Exenta N° 895, la demandada concluyó que su parte no logró desvirtuar los cargos formulados para eximirse de responsabilidad que le cabe en los hechos materia del sumario, aplicando al Sr. Andrés Camacho Bahamon, representante de CAMO Odontología SPA una multa de 20 UTM.

Señala que con fecha 11 de abril de 2018, don Andrés Camacho Bahamon realizó una presentación solicitando la nulidad de la Resolución Exenta N° 895, de 6 de febrero de 2018, por cuanto se le aplicó la multa de 20 UTM en forma personal, en circunstancias en que la sumariada es CAMO Odontología SPA, con motivo de lo cual, con fecha 9 de agosto de 2018 la SEREMI libró una Resolución Exenta N° 5508, en la cual resuelve rectificar la Resolución Sanitaria N° 000895, señalando que en los numerales primero de la parte resolutive donde dice don Andrés Camacho Bahamon debe decir “Aplicase a CAMO Odontología SPA”, legalmente representada por don Andrés Camacho Bahamon, ya individualizado una multa de 20 UTM”. Esa multa fue notificada con fecha 7 de septiembre de 2018, en dependencias de su representada ubicada en Victoria 442, comuna de San Bernardo.

Expresa que la Resolución del sumario sanitario N° 5508 de fecha 9 de agosto de 2018, la cual rectifica y complementa la Resolución Exenta N° 895 de 6 de febrero de 2018, que justificaría la multa aplicada a su representada en base a la aplicación de lo dispuesto en la norma técnica sobre esterilización y desinfección de alto nivel y uso de artículos médicos estériles en establecimiento de atención en salud y de los artículos 4, 10 y 14 del Decreto Supremo N° 283/1997 del Ministerio de Salud, que reproduce.

Dice que las dos infracciones constatadas por la SEREMI e indicadas en la resolución no constituyen infracciones a los artículos 4, 10 y 14 del D.S. N° 283/1997 y a la norma general técnica de esterilización y desinfección de elementos clínicos y tampoco la resolución reclamada no hace mención y tampoco ahonda cómo las dos situaciones observadas constituirían infracciones a los artículos 4, 10 y 14 del D.S. N° 283/1997 y Resolución Exenta N° 1665/2001 y, por lo demás, su representada no infringió las normas señaladas.

Es así que la primera observación, esto es “sala de esterilización no cuenta con flujo unidireccional para realizar dicho proceso”, ello no constituye infracción alguna a la ley ni a la norma técnica. Respecto al Reglamento sobre Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor, su representada cumplió con todas y cada una de las exigencias descritas en los artículos 10 y 14 del referido reglamento, no describiendo el acta de inspección circunstancia alguna que se pueda considerar como infracción a dichas disposiciones. En relación a la sala de esterilización, ésta cumple con los estándares exigidos para su funcionamiento, contando con el material y tecnología adecuada para la recepción, lavado, secado, inspección, preparación y empaque de artículos médicos utilizados.

A continuación dice que el hecho de que la sala de esterilización, supuestamente, no cuente con flujo unidireccional para realizar dicho proceso, no constituye vulneración a las normas indicadas como transgredidas.

En cuanto a la segunda infracción, cree que la reclamada ha incurrido en un grave error de hecho y de interpretación, toda vez que su



Foja: 1

representada no ha realizado modificación alguna a la planta física del segundo piso. En el acta de inspección de 30 de octubre de 2018 y la resolución reclamada no indican cuál sería la supuesta modificación de la planta física del 2° piso del establecimiento de su representada, por lo cual se encuentra en la indefensión.

En cuanto al traslado del área de esterilización, éste se realizó de la forma más cuidadosa y ciñéndose a lo que indica la ley y esa modificación no hace nacer la obligación de su representada de solicitar su autorización a la SEREMI, según lo que la propia norma indica.

Reitera que de la simple lectura del Acta de Inspección y de la Resolución reclamada se puede observar que se imputa una supuesta infracción a los artículos 4, 10 y 14 del D.S. 283/1997 y a la Norma Técnica sobre esterilización y desinfección de alto nivel y uso de artículos médicos estériles en establecimientos de atención en salud, sin embargo las conductas observadas por el ente fiscalizador no constituyen supuestas infracciones a las disposiciones legales ya señaladas, ni tampoco clarifica los hechos que constituirían dicha transgresión, debiendo la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, como órgano de la administración del Estado, a la Constitución Política de la República, regulándose su actuar por las normas del Código Sanitario y la Ley 19.8890, en cuanto a los actos administrativos que dicte en ejercicio de su cometido, de manera que las imputaciones deben ser concretas y precisas, conteniendo el detalle de los hechos constitutivos de la infracción que se imputa y la forma cómo ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado. Alega que en la redacción de la resolución recurrida, se han vulnerado los principios básicos del debido proceso, transgrediéndose el principio de legalidad contenido en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental y 2 de la Ley 18.575, que regula la actuación de los órganos del Estado. Concluye que debe dejarse sin efecto la resolución que se solicita reponer y/o reconsiderar por ser arbitraria e ilegal.

En subsidio, alega la inoponibilidad de la sentencia sanitaria contenida en la Resolución Exenta N° 005508 de 9 de mayo de 2018, que rectificó la resolución exenta N° 000895 de 6 de febrero de 2018, por cuanto fue notificada a su representada con fecha 7 de septiembre de 2018, es decir después de 20 días hábiles de dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Es así que la notificación del acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta por ser contrario a la ley, lo que provocó indefectiblemente la caducidad del mismo al resultar imposible su subsanación.

Dice que el artículo 45 de la Ley 19.980 que establece las bases de los Procedimientos Administrativos, impone a los órganos de la Administración del Estado el plazo legal y, por tanto fatal, de 5 días hábiles para notificar los actos administrativos de efectos individuales que dicten en ejercicio de sus funciones. Si bien la ley no estableció la sanción para el caso de incumplimiento, ello se debió a que establecerla resultaba innecesario, atendido lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, vale decir ante la existencia del principio de legalidad. Reitera que el artículo 45 de la Ley 19.880 establece en forma imperativa que las notificaciones deberán practicarse a más tardar en los cinco días siguientes a aquél en que haya quedado totalmente tramitado el acto administrativo y el no cumplimiento de los plazos allí contenidos supone infringir esas normas



Foja: 1

garantistas, lo cual lleva aparejada la caducidad del acto administrativo que se solicita reponer y/o reconsiderar.

A continuación cita una sentencia de la Excma. Corte Suprema y reproduce unos de sus considerandos.

Con fecha 30 de julio de 2019 se notificó la demanda a la demandada.

Con fecha 5 de agosto de 2019 tuvo lugar la audiencia de contestación y conciliación decretada en autos con asistencia de ambas partes.

La demandante ratifica la demanda en todas sus partes.

La parte demandada contesta la demanda por escrito, lo que se tuvo como parte integrante del comparendo, solicitando el rechazo de la misma en todas sus partes con costas.

Como antecedentes de la reclamación refiere que el sumario se inicia con motivo de la solicitud de fiscalización presentada por doña Yasna Andrea Fernández Vega, con fecha 26 de septiembre de 2017, dando cuenta de haber concurrido al establecimiento odontológico Camo Odontología SpA, para la extracción de una pieza dental y de haber sido atendida por profesional no habilitado para el ejercicio de la profesión de odontólogo, quien no habría realizado correctamente la extracción a causa de lo cual tuvo severas complicaciones, debiendo ser atendida posteriormente en un servicio de urgencias. A raíz de ello la autoridad sanitaria se constituyó con fecha 30 de octubre de 2017, en visita inspectiva en las instalaciones de la reclamante ubicadas en Victoria 442, comuna de San Bernardo, constatándose que las instalaciones de la Sala de Procedimiento Dental “Óptima Dental”, de propiedad de sociedad Camo Odontológica SpA infringían la normativa sanitaria, iniciando la investigación correspondiente.

En primer lugar, expresa, que controvierte formalmente la versión de los hechos en que se funda la reclamación y consecuencias jurídicas que de éstos la actora hace derivar, con excepción de los que se acepten expresamente en esta contestación.

Indica que con fecha 30 de octubre de 2017, funcionaria inspectora del Sub departamento de Profesiones Médicas de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, por solicitud de fiscalización, se constituyó en visita inspectiva en las instalaciones ubicadas en Victoria 442, comuna de San Bernardo, de propiedad de Camo Odontología SpA, levantándose el Acta correspondiente, en la que se consignaron los siguientes hechos:

- 1.- Sala de esterilización no cuenta con flujo unidireccional para realizar dicho proceso.
- 2.- Se realizó modificación de planta física del 2º piso, sin informar a la SEREMI, se trasladó área de esterilización a sala de lockers del personal y kitchen se traslada a sala de esterilización.

Citado con fecha 7 de noviembre de 2017 el representante legal de la empresa sumariada formuló los descargos que fueron debidamente analizados y considerados en la sentencia que se impugna y reproduce la parte correspondiente de la misma. Dice que la empresa sumariada ha infringido las disposiciones contempladas en los artículos 4, 10 y 14 del D.S. N° 283/1997, Reglamento sobre Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor, Resolución Exenta N° 1665/2001, que aprueba Norma General Técnica de Esterilización desinfección de Elementos Clínicos,



Foja: 1

ambos del Ministerio de Salud. Cita y reproduce los siguientes artículos 4, 10 y 14 del D.S. N° 283/1997.

Agrega que las defensas expresadas por la empresa reclamante en sus descargos, así como los antecedentes que en esa oportunidad aportó o fueron suficientes para desvirtuar, en lo que dice relación con los hechos infraccionales constatados y consignados en el acta respectiva, el carácter de plena prueba que los artículos 156, en relación con el artículo 166 del Código Sanitario otorgan al acta de inspección y por ello la sentencia le aplicó una multa de 20 UTM a la sociedad reclamante.

Indica que lo dispuesto en los artículos 4, 10 y 14 del D.S. N° 283/1997 y en la Resolución Exenta N° 1665/2001, ambos del Ministerio de Salud, tienen por finalidad asegurar la indemnidad de los pacientes ante los múltiples agentes que puedan afectar severamente su salud en cualquier intervención médica u odontológica que se practique a su respecto, formando parte del procedimiento establecido en la citada normativa a efectos de lograr tal finalidad el flujo unidireccional en el procedimiento de esterilización. El flujo unidireccional del proceso de esterilización exige a la reclamante disponer en su establecimiento de atención odontológica de espacios delimitados para: 1) recepción del material sucio; 2) limpieza y lavado; 3) exposición al proceso de esterilización; 4) almacenaje del material estéril; 5) área sucia, todo lo cual garantice que todo el material utilizado en las intervenciones a los pacientes siga estrictamente un única dirección de “ingreso de material contaminado” a “salida de material estéril”, todo lo cual era lo que no se encontraba garantizado al momento de efectuarse la visita inspectiva y ello contraviene la normativa sanitaria que la sentencia impugnada tuvo por infringida.

En cuanto al segundo hecho constatado en el acta de inspección, esto es “realización de una modificación de planta física del 2do piso, sin informar a esta Secretaría”, el acta misma contiene la precisión del cargo que formula, expresando que éste consiste en haber trasladado el área de esterilización a la sala de lockers del personal y haber trasladado la kitchenette a la sala de esterilización. Añade que a partir de la normativa citada y reproducida, en cualquier establecimiento de atención de salud, la ubicación de los espacios de que dispone no es irrelevante el área destinada a la realización del proceso de esterilización, pues son áreas que deben cumplir estrictamente las normas sanitarias pertinentes y están sometidas al control y supervigilancia de la autoridad de salud correspondiente. Es así que la reclamante no puede pretender que el traslado del área de esterilización constatado no constituya modificación de la planta física.

A continuación dice que las alegaciones de la reclamada no desvirtúan la existencia de las infracciones y la sentencia sanitaria analiza la alegación efectuada por la sumariada y los elementos de convicción aportados y, al evaluarlos, consideró que no debía eximir la de la responsabilidad en los hechos imputados y la motivación del acto administrativo consiste en manifestar la razón que se ha tenido para dictarlo, pero basta que la motivación sea sucinta y suficiente para que se puedan conocer los motivos, pero no es preciso que se recojan todos y cada uno de los antecedentes que formaron parte del iter procedimental que concluyó el acto administrativo de término. Además, la resolución sancionatoria de autos es un acto terminal del procedimiento administrativo realizado, el que tiene como antecedentes y base directa todo el contenido del sumario sanitario.



Foja: 1

Prosigue diciendo que en conformidad al artículo 166 del Código Sanitario, en relación al artículo 156, inciso segundo, el acta levantada por funcionario competente tiene el carácter de plena prueba respecto de la infracción a las leyes y reglamentos sanitarios que en ella se consignan y que fuera debidamente comprobada por el funcionario fiscalizador, que tiene el carácter de ministro de fe al funcionario que practique la diligencia señalada.

Cita la demandada y reproduce el artículo 171 del Código Sanitario y conforme a éste se puede constatar que se encuentran plenamente comprobados en el sumario sanitario instruidos en conformidad a las normas del Código Sanitario los hechos que han motivado las sanciones, consignados por el Ministro de Fe y no desvirtuados por la sumariada y que constituyen una infracción a lo dispuesto en los artículos 4, 10 y 114 del D.S. N° 283/1997, Reglamento sobre Salas de Procedimiento y Pabellones de Cirugía Menor y en la Resolución Exenta N° 1665/2001 que aprueba la Norma General Técnica de Esterilización Desinfección de Elementos Clínicos del Ministerio de Salud. La carga de la prueba en la reclamación corresponde a la reclamante, debiendo comprobar que los hechos que motivaron la sanción no se encuentran comprobados en el sumario sanitario.

En cuanto a la supuesta caducidad de la facultad sancionadora de la SEREMI de Salud Metropolitana, aclara que la notificación al Sr. Andrés Camacho Bahamon, representante de la sociedad sumariada se practicó con fecha 22 de agosto de 2018, sin perjuicio de lo cual solicita el rechazo de esta alegación, tal como lo ha declarado de manera reiterada la jurisprudencia de la Contraloría General de la República en diversos dictámenes, que salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, toda vez que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos y que su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, de modo que la expiración de dichos términos no impide que las correspondientes actuaciones se lleven a cabo con posterioridad a ella. En el presente caso no ha operado la preclusión porque falta un requisito o condición sine qua non la existencia de un plazo fatal y que la actividad procesal se verifique después del vencimiento del mismo, cuestiones que no acontecen en el presente caso, desde que el plazo señalado en el artículo 45 de la Ley 19.880 no tiene el carácter de fatal. A continuación cita y reproduce un considerando de una sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema.

Expone que es improcedente modificar la sanción o rebajar el monto de la multa, pues la sanción reclamada corresponde a la infracción y resulta proporcional a ella. Dice que la Administración es la entidad constitucional y legalmente competente para ejercer la discrecionalidad- sea mediante actos administrativos generales o bien particulares, como la Resolución reclamada- y, los jueces los llamados a controlarla, control que supone una neta diferenciación, asimismo constitucional, entre la función jurisdiccional y la propia del poder administrativo, de modo que en la labor de supervisar, censurar y corregir la actuación de otro no puede llegar en ningún caso a comprender en la correspondiente actividad una sustitución de la controlada. Refiere que el artículo 171 del Código Sanitario constituye



Foja: 1

una vía especial de reclamación, establecida exclusivamente como un medio para dejar sin efecto resoluciones sanitarias que aplican sanciones, las que son el resultado de un proceso público contradictorio en el que se otorga audiencia a la parte sancionada, conocida como Sumario Sanitario. Cita y reproduce, a continuación los artículos 171 y 172 del Código Sanitario y unos considerandos de algunas sentencias de la de la Excm. Corte Suprema.

Concluye diciendo que tanto la Resolución N° 5508 de fecha 9 de agosto de 2018, que se reclama, como la Resolución N° 895 de 6 de febrero de 2018, rectificada por aquélla, que dio por establecida las infracciones constatadas y consignadas en el acta de inspección, aplicándose a la reclamante de autos a una multa ascendente a 20 UTM, se ajusta a lo dispuesto en los artículos 174 del Código Sanitario y que considerando la gravedad de las infracciones y que el monto máximo de multa aplicable conforme a la ley asciende a 1.000 UTM, en definitiva se le aplicó una multa que constituye el 2% de aquella. De manera que debe rechazarse la solicitud subsidiaria, tanto de modificación de la sanción, como la de rebaja de la multa impuesta por la autoridad sanitaria, ya que conforme a los artículos 170 a 172 del Código Sanitaria carece de facultades para modificar la sanción o rebajar la multa impuesta por la sentencia antes citada, ya que el juez sólo puede resolver del modo que se encuentra autorizado, que no es la de modificar o reducir la multa, cuyo monto, por lo demás se encuentra determinada en la forma fijada por la ley.

Llamadas las partes a conciliación, ésta no se logra.

Se recibió la causa a prueba no rindiéndose ninguna en autos.

CONSIDERANDO.-

PRIMERO: Que se acredita con el Sumario Sanitario Rol N° 4300/ 2017 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana, legalmente acompañada a los autos e inobjeto, los siguientes hechos: A) Que con fecha 30 de octubre de 2017 los funcionarios de la Secretaría de Salud de la Región Metropolitana, los Sres. Verónica Hernández y Leonardo Canales se constituyeron en visita de inspección en Sala de Procedimiento Dental “Óptima Dental”, ubicado en Victoria N° 442, comuna de San Bernardo de propiedad de CAMO Odontológica SpA., cuyo representante legal es don Andrés Camacho Bahamon, constatando lo siguiente: 1) Sala de esterilización no cuenta con flujo unidireccional para realizar dicho proceso. 2) Se realizó modificación de planta física del 2° piso, sin informar a la SEREMI, se trasladó área de esterilización a sala de lockers del personal y kitchen se traslada a sala de esterilización. B) Que con fecha 6 de febrero de 2018 se dictó la Resolución Exenta N° 000895 en el sumario sanitario N° 4.300/2017 por el Secretario Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana dictaminando que atendido los hechos consignados en el Acta de Inspección de fecha 30 de octubre de 2017, levantada por funcionarios inspectores del Sub departamento de Profesiones Médicas importan incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4, 10 y 14 del D.S. N° 283/1997 Reglamento sobre Salas de Procesamiento y Pabellones de Cirugía menor, Resolución Exenta N° 1685/2001 que aprueba Norma General Técnica de Esterilización Desinfección de Elementos Clínicos, ambos del Ministerio de Salud, aplicando a don Andrés Camacho Bahamon una multa de 20 UTM (Veinte Unidades Tributarias



Foja: 1

Mensuales) . C) Que con fecha 9 de agosto de 2018 se dictó la Resolución Exenta N° 005508 por la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana rectificando la Resolución Sanitaria N° 000895 pronunciada por esa Autoridad Sanitaria el pasado 6 de febrero de 2018, en el siguiente sentido que en los numerales primero de la parte primera de la parte resolutive de dicho instrumento donde dice “don Andrés Camacho Bahamon debe decir: “Aplicase a CAMO Odontológica SpA, legalmente representada por don Andrés Camacho Baham, ya individualizado, una multa de 20 U.T.M. (Veinte Unidades Tributaria Mensuales)....)

SEGUNDO: Que la primera infracción consignada en el Acta señalada en el motivo anterior, esto es “Sala de esterilización no cuenta con flujo unidireccional para realizar dicho proceso” infringe las siguientes normas: a) El artículo 10 del D.S. N° 283/1997 sobre Reglamento sobre Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor, por cuanto la sala de procedimiento propiamente tal deberá contar con delimitación de áreas limpia y sucia, con sus respectivos lavamanos, área para lavado, preparación y esterilización de equipos, instrumental e insumos en que se cumpla la normativa atingente, sistema de eliminación de materiales contaminados, cortopunzantes y productos químicos de acuerdo a las normativas vigentes. b)

El artículo 14 del D.S. N° 283/1997 que dispone que el pabellón de cirugía menor y sus instalaciones deberán asegurar la higiene y seguridad de los procedimientos e intervenciones que en él se realicen, consignando en la letra e) Unidad de esterilización con secciones de lavado, preparación y esterilización de equipos e instrumental. Asimismo infringe el Anexo 11 de la Resolución Exenta N° 1665/2001 del Ministerio de Salud, según el cual para el procesamiento del material odontológico se deben cumplir las mismas normas criterios que se aplican al resto del material del hospital y la esterilización es el resultado de un proceso y no solo la exposición del agente esterilizante; para conseguir material estéril o desinfectado de alto nivel, se deben realizar una serie de procedimientos independientes que son: lavado/descontaminación, inspección, preparación/empaque, exposición al método de esterilización o desinfección, almacenamiento y entrega. Cada uno de estos procedimientos tiene importancia en el resultado de un proceso y no solo de la expansión del agente esterilizante y si existen fallas en cualquiera de ellas, el material no puede considerarse estéril o desinfectado aun cuando haya sido sometido a un método de esterilización o desinfección.

TERCERO: Que en el sumario sanitario, la sumariada y reclamante en este juicio no aportó prueba alguna para desvirtuar esta infracción constatada por

los funcionarios de la Secretaría de Salud de la Región Metropolitana, ni en el sumario sanitario ni en el presente juicio, por lo que se tiene por acreditada. CUARTO : Que la segunda infracción consignada en el Acta N° 0156188 de 30 de octubre de 2017 por los funcionarios de la Secretaría Regional Metropolitana, esto es “Se realizó modificación de planta física del 2° piso, sin informar a la SEREMI, se trasladó área de esterilización a sala de lockers del personal y kitchen se traslada a sala de esterilización”, infringe el artículo 4° del D.S. N° 283/1997 sobre Reglamento sobre Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor, que establece que la instalación y funcionamiento de las salas de procedimientos requieren de



Foja: 1

autorización expresa otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud requieren de autorización expresa otorgada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud en cuyo territorio se encuentre ubicada; requieren de igual autorización los cambios de objetivo, modificación de la planta física . En el presente caso lo constatado por los funcionarios de la Secretaría Regional Metropolitana no ha sido desvirtuado por el sumariado, ni en el Sumario Sanitario ni en el presente juicio.

QUINTO: Que tampoco la precedente infracción fue desvirtuada en el Sumario Sanitario por el sumariado y reclamante de este juicio, ni en el presente juicio, por ningún medio de prueba, por lo que se da por probada.

SEXTO: Que se hace presente que en el Sumario Sanitario N° 4300 año 2017 seguido ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana el sumariado CAMO Odontología SpA. no formuló descargo alguno y no presentó pruebas para desvirtuar las infracciones constatadas en el Acta N° 0156188 de 30 de octubre de 2017 por los funcionarios de la Secretaría Regional Metropolitana, por lo que la Resolución Exenta N° 000895 de 6 de febrero de 2018 sólo pudo limitarse a expresar “Que analizadas debidamente las alegaciones efectuadas y los elementos de convicción allegados a este expediente, esta Autoridad Sanitaria concluye que la sumariada no logra desvirtuar los cargos formulados para eximirse de responsabilidad que le cabe en los hechos materia de este sumario, ya que las deficiencias constatadas afectan el óptimo funcionamiento del establecimiento sumariado”.

SÉPTIMO: De lo razonado en los considerandos anteriores, se desecha la alegación de la reclamante en cuanto la Resolución Exenta N° 000895 de 6 de febrero de 2018, rectificada por la Resolución Exenta 005508 de 9 de agosto de 2018 no contiene imputaciones concretas y precisas, pues esta resolución detalla hechos constitutivos de la infracción que se imputan y como ellos han afectado los deberes que se establecen las normas legales que se han vulnerado y no se ha transgredido ningún principio de legalidad contenido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y 2 de la Ley 18.575.

OCTAVO: Que, el reclamante a efectuado una alegación subsidiaria, referente a que la sentencia contenida en la Resolución Exenta N° 005508 de 9 de agosto de 2018, que rectificó la Resolución Exenta N° 000895 de 6 de febrero de 2018 le es inoponible, por haber sido notificada después de 20 días hábiles de dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, lo que habría provocado indefectiblemente la caducidad del acto administrativo, adoleciendo la notificación del mismo de nulidad.

NOVENO: Que no existe disposición legal expresa en contrario que disponga que los plazos que establecen las leyes para los trámites y decisiones de la Administración sean fatales, razón por la cual se rechaza esta alegación subsidiaria no procediendo dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 005508 de 9 de agosto de 2018, que, por lo demás, sólo se limitó a rectificar la Resolución Exenta N° 0008795 de 6 de febrero de 2018, en cuanto a la persona a quien se le aplica la multa es a CAMO Odontológica SpA, cuyo representante legal es don Andrés Camacho Bahamon y no a don Andrés Camacho Bahamon, como se indicaba en la primera de las Resoluciones Exentas antes señaladas.



Foja: 1

DÉCIMO : Que, por último, en la parte petitoria, la reclamante solicita que en subsidio sólo se amoneste a la sociedad sumariada, sin aplicar la multa o, en último caso, rebajar la multa aplicada.

DÉCIMO PRIMERO: Que el artículo 174 del Código Sanitario dispone que la infracción de cualquiera de las disposiciones de este Código o de sus reglamentos y de las resoluciones que dicten los Directores de los Servicios de Salud o el Director del Instituto de Salud Público de Chile, según el caso, salvo las disposiciones que tengan una sanción especial, será castigada con una multa de un décimo de unidad tributaria mensual hasta mil unidades tributarias mensuales, de manera que la multa aplicada en el presente caso, está acorde con las sanciones aplicadas a la reclamante de este juicio, por lo que se rechaza la sanción aplicada.

Y, de conformidad, además a lo dispuestos en los artículos 1698 y 1700 del Código Civil, 4, 10 y 14 del D.S. N° 283/1997 Reglamento sobre Salas de Procesamiento y Pabellones de Cirugía Menor, Resolución Exenta N° 1685/2001 que aprueba Norma General Técnica de Esterilización Desinfección de Elementos Clínicos, 161 y siguientes y 174 del Código Sanitario, 160, 169, 170, 342 y 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

Que se rechaza la reclamación de lo principal del escrito de 13 de septiembre de 2018 interpuesta por CAMO Odontología SpA, con costas,
Regístrese.

PRONUNCIADA POR DOÑA XIMENA DÍAZ GBUZMÁN, JUEZA SUPLENTE. AUTORIZA DON CHRISTIAN VIERA NARANJO, SECRETARIO SUBROGANTE.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diecisiete de Agosto de dos mil veinte**



